El Proyecto de PCI ilícito

por Justo Adámez

¿Qué es ilícito? El término ilícito se refiere a cualquier acto o comportamiento que no está permitido por la ley o que incumple las normativas vigentes?

Un proyecto de PCI es ilícito cuando infringe las leyes y reglamentos de aplicación y/o cuando el técnico titulado que lo firma no es competente, ya sea por no contar con las competencias profesionales necesarias en el ámbito de la seguridad contra incendios, o bien, por no estar facultado, si es el caso de que perteneciera a la misma empresa que ejecuta la instalación.

En algunos círculos se tiene la errónea creencia de que un técnico titulado por el hecho de ser persona técnica titulada universitaria ya es competente para firmar proyectos de seguridad contra incendios. Esto en realidad no es así en España ni en el resto de países desarrollados, por mero sentido común, aunque aún encontramos técnicos que se autodesignan competentes, lo que puede calificarse como insensatez e imprudencia, hecho ilícito bajo el que ponen en peligro su patrimonio particular y su futuro, poniendo además en riesgo la actividad de su cliente, a las personas que allí se encuentren, a las empresas instaladoras y mantenedoras contra incendios, comprometiendo incluso a la Administración, al seguro y a terceros.

La actividad de la ingeniería de proyecto está regulada, la actividad en el sector contra incendios está regulada y los requisitos para el proceso de la construcción de una instalación está ordenada por leyes.

En este artículo reviso los aspectos regulados y competenciales que aplican al proceso de legitimar un proyecto contra incendios, así como el régimen sancionador establecido en las regulaciones y las responsabilidades legales que se enfrentan, tanto por no hacerlo correctamente como cuando se hace ilícitamente.

1.- ¿Cuándo se requiere un proyecto contra incendios?

Tanto en edificación como en establecimientos industriales se requiere un proyecto contra incendios para una nueva construcción, para las zonas ampliadas o reformadas, o ante la modificación sustancial de los sistemas de protección existentes, ya sea por renovación por obsolescencia de lo instalado, como por cambios sustanciales, ya que se requiere en ambos casos la aplicación de las normas UNE en vigor, la firma del nuevo responsable del proyecto de la obra y la certificación de la instalación por la nueva empresa instaladora.

Estos proyectos contra incendios tienen la consideración de Obra Mayor y por tanto requieren la presentación del proyecto ante el Ayuntamiento para la solicitud de Licencia de Obra.

Una vez ejecutado el proyecto y aprobado por la dirección facultativa, el expediente ha de ser presentado ante Industria para su registro y pertinente legalización.

2.- ¿Quién está habilitado para redactar y firmar un proyecto contra incendios?

A los proyectos de obras contra incendios aplica, además del RIPCI, CTE-DB/SI o RSCEI, la recientemente actualizada Ley de Industria y la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, así como la Ley de PRL, en la que en defensa de la calidad y garantías que protejan al usuario final, se establecen los requisitos y obligaciones de los agentes intervinientes, el 1) promotor, el 2) proyectista y dirección facultativa, y 3) el instalador, debiendo ser figuras administrativamente independientes.

Por ello, está regulado que el proyectista y director de obra que certifique la recepción de obra no puede coincidir con el constructor, instalador contra incendios en nuestro caso, circunstancia en la que el RIPCI no entra (*en este se habilita a instaladores sólo a hacer diseños de los sistemas de activa en base a UNE para que puedan validar que la obra a ejecutar de esos sistemas efectivamente cumple la UNE correspondiente*), y tampoco compete vigilar a las Administraciones donde trabaja el firmante, aunque convendría que tanto estas como los seguros lo examinaran, porque al no hacerlo, da cabida a casos de intrusismo, más frecuentes de lo deseable, que expone a los usuarios finales a un grave riesgo de responsabilidades civiles y administrativas, ya que son obras ejecutadas fuera de la legalidad.

La nueva Ley de Industria aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 20-12-2024, en la que se encuadra la protección contra incendios, en el Título VI – Seguridad y Calidad Industrial, Artículo 54.5 indica al respecto del agente firmante de los proyectos:

Persona técnica titulada competente, con el cometido de redactar y firmar los proyectos de diseño e implantación, o dirigir, posteriormente, la construcción de aquellas instalaciones recogidas en los Reglamentos de Seguridad Industrial.

Se considera como persona técnica titulada competente, **únicamente y de manera exclusiva**, a aquella persona técnica titulada universitaria que cuente con un seguro RC profesional para la prestación del servicio de redactar y firmar los proyectos y cuente con las atribuciones legalmente establecidas de su competencia profesional.

Así pues, el técnico firmante del proyecto y dirección de la obra ha de contar con una póliza de seguro **RC profesional** que especifique la labor como proyectista contra incendios y director de obras. No sirven las pólizas generalistas, ni la del Colegio Profesional, ni las pólizas de empresas instaladoras, aunque incluyan el diseño como parte de la instalación o mantenimiento.

En resumen, los proyectos contra incendios solo serán lícitos, si además de cumplir los reglamentos y ajustarse a la realidad de la obra y el riesgo, son firmados por técnicos titulados competentes que cuenten con un seguro RC Profesional específico con cobertura para proyectos contra incendios y no pertenezcan a la misma empresa que ejecuta la obra.

3.- Responsabilidades y Régimen sancionador

Las responsabilidades administrativas y civiles respecto de los proyectos ilícitos, aparte de la sanción correspondiente en función de su gravedad, son compatibles con la indemnización por los daños y perjuicios causados.

El régimen sancionador es el ordenado en la Ley de Industria, que establece que:

Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:

- a) Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 euros.
- b) Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros.
- c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 100.000.000 euros.

Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

- a) La importancia del daño o deterioro causado.

- b) El grado de participación y beneficio obtenido.
- c) La capacidad económica del infractor.
- d) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
- e) La reincidencia.
- f) El número de productos puestos en el mercado objeto de la infracción.
- g) El volumen de facturación de la entidad, incluido el grupo al que pertenezca.

Serán sujetos responsables de las infracciones, las personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas. En particular se consideran responsables:

- a) El propietario, director o gerente del establecimiento en que se compruebe la infracción.
- b) El proyectista, el director de obra, en su caso, y personas que participan en la instalación, reparación, mantenimiento, utilización o inspección de las industrias, equipos y aparatos, cuando la infracción sea consecuencia directa de su intervención.
- c) Los fabricantes, vendedores o importadores de los productos, aparatos, equipos o elementos que no se ajusten a las exigencias reglamentarias.
- d) Los organismos, las entidades y los laboratorios especificados en esta Ley, respecto de las infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad.

En la clasificación de las infracciones más críticas destacan las siguientes:

Infracción Muy Grave

- El incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa industrial siempre que ocasionen riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.
- **Conducirse por acción u omisión, de forma que implique engaño o se induzca a error a las y los usuarios finales.**

Infracción Grave

- La puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización o inscripción registral, o sin la previa presentación de los documentos exigidos cuando alguno de éstos sea preceptivo de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria.
- El ejercicio o desarrollo de actividades sin la correspondiente autorización, habilitación o inscripción registral, cuando ésta sea preceptiva, o transcurrido su plazo de vigencia, así como la modificación no autorizada por la autoridad competente de las condiciones y requisitos sobre los cuales se hubiera otorgado la correspondiente autorización, habilitación o inscripción.
- No disponer de contratos de mantenimiento de las instalaciones con empresas habilitadas en los casos en que sean obligatorios.
- **La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.**
- **La redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones establecidas en la normativa aplicable.**
- La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las personas, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente.
- La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados.
- **La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o la declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.**

4. Conclusión

La entrada en vigor de la nueva Ley de Industria traerá aparejada la publicación del nuevo Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (nuevo RSCEI) y ligeros cambios en el RIPCI y posiblemente en el CTE-DB/SI, actualizándose un escenario reglamentario, que si bien no es nada disruptivo en cuanto a los niveles de exigencia en seguridad contra incendios, si supone una oportunidad para poner encima de la mesa cuestiones de vital trascendencia como la tratada en este documento, que no por hablarse poco de ella, deja de ser muy relevante.

En mis 25 años como ingeniero de protección contra incendios y como director de una firma de ingeniería y consultoría contra incendios, he conocido de primera mano multitud de casos con faltas graves y muy graves por parte empresas y profesionales vinculados al sector contra incendios. En algunos casos de empresas de ingeniería, en otras de compañías instaladoras, de mantenimiento, de fabricantes, e incluso de algún Organismo de Control.

Infracciones derivadas de proyectos realizados por ingenierías con aplicación incorrecta (voluntaria) de la reglamentación para justificar evitar instalar las medidas de protección contra incendios necesarias. Certificaciones de Direcciones de Obra que no prueban ni verifican los sistemas, pero cobran por la visita. Instaladores y mantenedores que realizan y firman los proyectos que luego ellos mismos ejecutarán. Organismos de Control que sin disponer de planos ni cálculos ni certificados ni proyecto, dan el Conforme a instalaciones.

Confío que este 2025 que ahora arranca, en el que tendremos actualizaciones reglamentarias en el sector, también sirva para tomar conciencia de que los ilícitos ya no tienen cabida, desprestigian el sector y ponen en un alto riesgo a la sociedad.

De poco sirven las regulaciones si no se cumplen y si el propio sector no apuesta por la profesionalidad y honestidad, ante una sociedad a la que tenemos la obligación de responder poniendo en valor la seguridad ante incendios y el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias de cada parte.